



*****1

VS.

INSPECTOR ADSCRITO AL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON SEDE EN ENSENADA.

EXPEDIENTE: 149/2025 J.T.

JUICIO DE MÍNIMA CUANTÍA

Ensenada, Baja California, uno de diciembre de dos mil veinticinco.

SENTENCIA DEFINITIVA, que declara la nulidad de boleta de infracción impugnada.

GLOSARIO

- *parte actora*: *****1.
- *inspector*: Jesús Iván Martínez Gutiérrez; inspector adscrito al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en Ensenada.
- *delegado*: delegado en Ensenada del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California¹.
- *Instituto*: Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California.
- *Ley de Movilidad*: Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.
- *Reglamento de Transporte*: Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Ensenada, Baja California.
- *Ley del Tribunal*: Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

¹ Llamado al presente juicio para formar parte de la controversia, en términos de lo previsto en la fracción III del artículo **42** de la *Ley del Tribunal*.

ANTECEDENTES DEL JUICIO

I. Presentación de la demanda. La demanda se presentó el quince de enero de dos mil veinticinco.

II. Admisión de la demanda: La demanda se admitió en acuerdo del seis de febrero de dos mil veinticinco.

III. Acto impugnado: La boleta de infracción número *****2, levantada por el *inspector* con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

IV. Contestación de demanda. El *delegado* e *inspector* contestaron la demanda en términos de los escritos visibles en autos a fojas 028 a 046, y de 047 a 065, respectivamente.

V. Citación. Transcurrido el plazo para formular alegatos, quedó cerrada la instrucción del juicio y citadas las partes para oír sentencia.

COMPETENCIA

Este Juzgado Tercero del *Tribunal Estatal* es competente para conocer del presente juicio por razón de la materia, al promoverse en contra de acto administrativo emitido por autoridad de la administración pública estatal de Baja California; de conformidad con lo dispuesto por el artículo **26**, fracción I, de la *Ley del Tribunal*.

Así también, conforme a lo previsto en el último párrafo del mismo artículo **26**, de la *Ley del Tribunal*, es competente para conocer del presente juicio por virtud del territorio, ya que el domicilio particular de la *parte actora* se encuentra dentro de su circunscripción territorial; determinada por el

Pleno del *Tribunal Estatal* en acuerdo del doce de mayo de dos mil veintitrés².

ESTUDIO DE LA CONTROVERSIA

1.1 Planteamiento del problema.

El *inspector*, en la boleta de infracción impugnada, indicó que la unidad vehicular conducida por la *parte actora*, [camión de carga tipo caja cerrada con placas de Guanajuato] se encuentra realizando servicio de transporte de carga con placas de otro Estado, y por lo cual consideró que infringió el artículo **108**, fracción I, del *Reglamento de Transporte*.

La cuestión a dilucidar en la presente controversia versa sobre la legalidad de dicha boleta de infracción; atendiendo a los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda.

1.1 En la boleta de infracción impugnada no se determina cuales es la sanción impuesta a la parte actora.

El último párrafo del artículo **108** de la *Ley del Tribunal*, establece que este órgano jurisdiccional podrá hacer valer de oficio, al momento de resolver, incluso en segunda instancia, cualquiera de las causales de nulidad señaladas en dicho artículo, si estima que ha sido acreditada en autos su existencia, aunque ésta no se haya invocado expresamente por el demandante.

En el caso de estudio, y de lectura de la boleta de infracción impugnada, no se advierte que el *inspector* haya hecho constar cual es la sanción a que se hizo merecedor la *parte actora*, al determinar que la unidad vehicular conducida se encuentra realizando servicio de transporte de carga con placas de otro Estado de la república mexicana.

² Publicado en el Periódico Oficial de Baja California, número 30, tomo CXXXX, del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

Esta omisión hace surgir la hipótesis de nulidad prevista en la fracción IV del artículo **108** de la *Ley del Tribunal*; misma que la suscrita juzgadora hace valer de oficio, por virtud de lo siguiente:

La *Ley de Movilidad* en su artículo **2**, fracciones XXXV, XXXVI y LXXXIV, dispone lo siguiente:

«ARTÍCULO 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

[...]

XXXV. *Infracción*: Es el incumplimiento de las disposiciones normativas a la presente Ley su Reglamento y disposiciones aplicables, la cual amerita una sanción, medida de seguridad o de urgente aplicación y en su caso arrastre y depósito de todos los vehículos incluyendo los del servicio público, privado o de servicios conexos de movilidad o transporte;

XXXVI. *Infracción electrónica*: Las infracciones a la Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables que sean formuladas a través de equipos o sistemas electrónicos a cargo del Instituto;

[...]

LXXXIV. *UMA*: La Unidad de Medida y Actualización (UMA);

La misma *Ley de Movilidad*, en su numeral **234**, fracción II, dispone que **es atribución de los inspectores** de movilidad, el **levantar las boletas de infracción** y actas de inspección en el ámbito de su competencia.

Las sanciones que pueden imponerse por infracciones a preceptos legales en materia de transporte y movilidad, se encuentran previstas en el numeral **250** de la *Ley de Movilidad*; siendo el apercibimiento; multas; cancelación, suspensión o revocación de concesiones, permisos y autorizaciones; y arrastre, depósito o aseguramiento conforme a la *Ley de Movilidad* y otras disposiciones aplicables.

Ese mismo precepto legal, en su último párrafo, dispone que **están autorizados para imponer sanciones** a los infractores, **mediante boleta de infracción** física o de manera

electrónica, por el *Instituto* a través de su director general o los servidores públicos a los que le delegue de conformidad

la normatividad aplicable las funciones de inspección, vigilancia o policía administrativa; quienes **estarán autorizados para imponer sanciones a los infractores** de la *Ley de Movilidad*, su reglamento o demás disposiciones normativas aplicables, así como los procesos para la notificación de dichos (sic) procedimientos, medidas de seguridad y sanciones.

Por su parte, el *Reglamento de Transporte*, en su artículo **101**, establece las sanciones que podrán imponerse en materia de transporte; siendo la amonestación; el apercibimiento; multas; y la cancelación o revocación.

Ahora bien, los numerales **252** y **253** de la *Ley de Movilidad* establecen, respectivamente, que **el Instituto será la autoridad competente para calificar, revisar y ejecutar las infracciones** a la *Ley de Movilidad* y su reglamento, y que la imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y Actualización al momento de imponerse la infracción.

En tanto, el *Reglamento de Transporte* en su artículo **99**, dispone que **la competencia para imponer sanciones**, entre diversas autoridades, **corresponde también a los inspectores** que para tales efectos se habiliten.

Atendiendo a lo dispuesto en los preceptos legales referidos en párrafos anteriores, y para el caso de estudio, la boleta de infracción electrónica impugnada **no** señala cual sanción, de las previstas en el numeral **250** de la *Ley de Movilidad*, o en el artículo **101** del *Reglamento de Transporte*, es la que se hizo merecedor la *parte actora* por incurrir en la

conducta infractora prevista en la fracción I del numeral **108** del mismo *Reglamento de Transporte*.

Cabe mencionar que las sanciones **impuestas** por los inspectores están sujetas a su **calificación** y **revisión** por autoridad del *Instituto*; según lo dispone el citado numeral **252** de la *Ley de Movilidad*.

No pasa desapercibido que el artículo **108**, fracción I, del *Reglamento de Transporte*, mencionado como fundamento en la boleta de infracción impugnada; establece la **sanción fija de multa** de 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Sin embargo, se estima que dicho precepto legal no debe aplicarse en cuanto a la sanción, como multa, a que fueren merecedor la *parte actora*; por virtud de ser resultar violatorios de derechos humanos aquellos preceptos legales que establezcan sanciones sin un parámetro mínimo y máximo para individualizar la sanción a imponerse³.

En virtud de lo antes expuesto, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo **108**, fracción IV, de la *Ley del Tribunal*, toda vez que en la boleta de infracción impugnada se dejaron de aplicar las disposiciones debidas, como son los numerales **250** de la *Ley de Movilidad* y **101** del *Reglamento de Transporte*, que establecen las sanciones a imponerse por los inspectores al momento de levantarse las boletas de infracción electrónicas.

Resulta ocioso analizar los motivos de inconformidad que se invocan en la demanda, ya que independientemente del resultado de su estudio el sentido del fallo sería el decretado en párrafos anteriores; sin que ello implique transgredir el

³ Tal como establece la tesis de jurisprudencia intitulada: MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES; y cuyos datos de identificación son los siguientes: Registro digital: 200349. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P./J. 10/95. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Julio de 1995, página 19. Tipo: Jurisprudencia.

principio de exhaustividad que rige en la sentencia, en relación con lo previsto en el numeral **107** de la *Ley del Tribunal*, obteniendo la *parte actora* el máximo beneficio.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se declara la nulidad de la boleta de infracción número *****², levantada por el *inspector* con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

SEGUNDO. Se condena al *inspector* a emitir una resolución en la que cancele la boleta de infracción declara nula en el punto resolutive anterior, con todas sus consecuencias legales.

TERCERO. Toda vez que no procede recurso alguno en contra de las sentencias definitivas dictadas en los juicios de mínima cuantía, como lo es en el caso concreto, **la presente sentencia causa ejecutoria** por ministerio de ley; en términos de lo previsto en los artículos **110** y **154** de la *Ley del Tribunal*, y con apoyo en la tesis de jurisprudencia 10/2024⁴, emitida por el Pleno de este *Tribunal Estatal*.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo **112** de la *Ley del Tribunal*, en la notificación que por oficio que se haga al *inspector* requiérasele para que, en el plazo de tres días hábiles, exhiba los documentos que acrediten haber dado cabal y completo cumplimiento a la condena impuesta en punto resolutive anterior de esta sentencia ejecutoria.

CUARTO. Se apercibe al *inspector* que, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutive anteriores dentro del plazo concedido, se le impondrá el medio de apremio previsto en el primer enunciado de la

⁴ Intitulada: SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO DE MÍNIMA CUANTÍA. CAUSA EJECUTORIA DESDE SU EMISIÓN. Consultable en página oficial de internet de este *Tribunal Estatal* bajo el enlace siguiente:

<https://tejabc.mx/wp-content/uploads/2025/01/JURISPRUDENCIA-10-2024.pdf>.

fracción II del artículo **47** de la *Ley del Tribunal*, consistente en multa equivalente al valor mensual de la unidad de medida y actualización.

Notifíquese por boletín jurisdiccional a la parte actora y delegado, previo aviso a sus direcciones de correo electrónico correspondientes; y por oficio al inspector⁵.

Así lo resolvió la primera secretaria de acuerdos en funciones de titular del Juzgado Tercero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, Norma Patricia Bravo Castro; firmando ante la presencia del secretario de acuerdos, Juan Manuel Cruz Sandoval, que autoriza y da fe.

CERTIFICACIÓN. De conformidad con lo establecido en el considerando V de la sesión de Pleno del cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, referente a la autorización de implementación del expediente electrónico y la firma electrónica avanzada, así como por lo dispuesto en los artículos 35, fracción V, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California y 25, fracción II, del Reglamento Interior de este mismo órgano jurisdiccional; el suscrito Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero con residencia en Ensenada, Baja California, Juan Manuel Cruz Sandoval, hago constar que la sentencia que tengo a la vista se coteja y corresponde a la digitalizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en dicho Juzgado.

⁵ Como lo dispone el artículo **49**, fracción II, inciso b), de la *Ley del Tribunal*, se ordena al actuario de la adscripción que por oficio notifique al *inspector* del contenido de esta sentencia ejecutoria; por virtud de tratarse de la primera comunicación de cumplimiento que prevé el primer párrafo del numeral **112** de la *Ley del Tribunal*.

1

“ELIMINADO: Nombre, 2 párrafo(s) con 2 renglones, en foja 1.
Fundamento legal: artículos 54, 99 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el estado de Baja California, 55, 59 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.”

2

“ELIMINADO: Boleta de infraccion, 2 párrafo(s) con 2 renglones, en fojas 2 y 7.
Fundamento legal: artículos 54, 99 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el estado de Baja California, 55, 59 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.”

El suscrito Licenciado Juan Manuel Cruz Sandoval, Secretario de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, hace constar: -----
Que lo transcrito con anterioridad corresponde a una versión pública de resolución de primera instancia dictada en el expediente 149/2025 JT, en la que se suprimieron datos que se han clasificado como confidenciales, cubriendo el espacio correspondiente, insertando diez asteriscos; versión que va en ocho fojas útiles. -----
Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 54, 60, FRACCIÓN III, B), 99, 104 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el Estado de Baja California, y 55, 57, 58, 59 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Ensenada, Baja California, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veintiséis.-----



JUZGADO TERCERO
ENSENADA, B.C.